

Repensando las encrucijadas derivadas del COVID-19 en Argentina

Dra. Cristina Bloj¹

No es posible reflexionar sobre la pandemia sin atender a las condiciones estructurales preexistentes y, en razón de ello, estamos inclinados a pensar que el futuro se muestra desalentador para el país y para la región. Los retos que se afrontan están en línea con la magnitud de los problemas sin perjuicio de los resultados positivos que se han obtenido como consecuencia del aislamiento social riguroso. El presente ha visibilizado y profundizado conflictos recurrentes: desigualdad, informalidad, desempleo, recesión económica, déficits sanitarios y educativos. Al mismo tiempo, la vida democrática y el cotidiano se han puesto en una suerte de “pausa”, arrolladora, que impacta sobre el conjunto pero no a todos y todas por igual. La pandemia ha afectado más severamente a los grandes conglomerados urbanos y a los más desfavorecidos: alrededor del 50% de población en situación de pobreza se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires así como el mayor porcentaje de casos de COVID-19 del país. Es evidente que estos sectores exhiben serias dificultades para sostener el aislamiento preventivo frente al imperativo de generar recursos y a condiciones de habitabilidad inadecuadas. Hay que considerar, también, la mirada de género en tanto que las mujeres son uno de los grupos más perjudicados; un ejemplo de ello, es el modo en que se ha incrementado la violencia de género en este período.

Otro tópico a destacar es la revalorización del rol del Estado, interpelando la narrativa anti-estatal extendida y por momentos hegemónica. No obstante, en la escena nacional se han polarizado los discursos alrededor de las atribuciones o no de decidir una cuarentena prolongada, de las libertades individuales, y de legitimar o no consignas como “quedate en casa”; en torno a estos significantes se solapan proyectos políticos ya en pugna cuyas motivaciones exceden la intención de brindar, exclusivamente, una respuesta a la pandemia.

El ámbito público y la sociedad toda se sitúan frente al reto de, en lo inmediato, atender a la contingencia y en el mediano y largo plazo diseñar políticas integrales orientadas a: achicar la brecha de desigualdad, bregando por mayor inclusión; reactivar gradualmente la economía y la negociación público-privado; revalorizar la figura del Estado, legitimando su accionar en el cuidado y en la generación de políticas con previsión que mitiguen la incertidumbre; robustecer el sistema de salud, cuyos déficits se han puesto

¹ Antropóloga Social. Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Consultora Internacional.



en evidencia con mayor contundencia y que, en tiempo record, hubo que *aggiornar*; priorizar la atención al sistema educativo, hoy en jaque a partir de la transición forzosa de la presencialidad a la virtualidad, y evidenciando brechas digitales, escasa capacitación tecnológica, aprendizajes deficitarios y riesgo de aumento de la deserción escolar en los sectores de menores recursos. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta los costos emocionales producto de esta reconfiguración de los lazos sociales con la persistencia del aislamiento, con la nueva dinámica ciudadana, con la disrupción del cotidiano.

El país saldrá más debilitado de esta encrucijada. Por tanto, es fundamental que la agenda pública amplíe la inversión pública, la transferencia a las familias, la protección integral, el acceso a derechos básicos. Simultáneamente, hay que imaginar rumbos a más largo plazo, en consenso, que mitiguen las falencias en todos los dominios. Los gobiernos locales y provinciales tienen un rol clave en este proceso y, de hecho, a medida que fue avanzando la pandemia fueron ampliando sus incumbencias, participando en las decisiones con cierta autonomía respecto de la reapertura o del retroceso a fases previas de la dinámica societaria.

¿En este horizonte, puede la democracia participativa ser vista como alternativa para la “reconstrucción” postpandemia? Entendemos que sí y, de hecho, ya se pueden observar experiencias alentadoras impulsadas desde la sociedad civil y desde los gobiernos locales. Y, tributando en esta dirección, es pertinente recordar que uno de los mecanismos más extendidos y emblemáticos de implicación ciudadana, el Presupuesto Participativo, se activó por primera vez en Argentina en el contexto de la gran crisis del año 2001. Entonces, la historia sugiere que frente al desafío de recomponer las fisuras del andamiaje político, social y económico, la búsqueda de iniciativas fundadas en una lógica participativa puede contribuir al desarrollo de modelos innovadores más equitativos y solidarios.